Juzgado de lo Penal nº8 de Sevilla

AVDA. LA BUHAIRA Nº26, Edif . Noga.

SEÑALAMIENTOS 3ª PLANTA

EJECUTORIAS 2ª PLANTA

Fax: 955005424 Tel.: 662977796- 955519060- EJEC 955519061-662977795

N.I.G.: 4108743P20160001282

CAUSA: P. Abreviado 40/2018.

Ejecutoria:

Negociado: B

Juzgado de procedencia: JUZGADO MIXTO Nº3 DE SANLUCAR LA MAYOR

Procedimiento origen: Pro.A. 3/2018

Hecho: Impago de pensiones (Art 227 CP)

Contra: [REDACTED]

Procurador/a: Sr./a. [REDACTED]

Abogado/a: Sr./a. [REDACTED]

Acusación Particular: [REDACTED]

Procurador/a: IVAN REYES MARTIN y [REDACTED]

Abogado/a: OLMO LOPEZ FERNANDEZ y [REDACTED]

Responsabilidad Civil: [REDACTED]

SENTENCIA Nº [REDACTED]/19

En Sevilla, a veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve

La Iltrma. Sra. D^a Patricia María Rubio Sánchez, Magistrada titular del Juzgado de lo Penal Número OCHO de los de ésta Capital, ha visto, en juicio oral y público, los autos del procedimiento antes referenciado, dimanante de P.A. 3/18, seguido por el Juzgado de Instrucción Núm. 3 de Sanlúcar la Mayor, por delito de abandono de familia.

Han sido partes:

- El Ministerio Fiscal.

- El acusado, don [REDACTED], con DNI. [REDACTED], sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa, defendido por la Letrada doña [REDACTED], de acuerdo con los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El juicio oral ha tenido lugar en audiencia pública, practicándose las pruebas propuestas y no renunciadas y documental reproducida.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal formuló conclusiones definitivas, apreciando en los hechos un delito de abandono de familia, previsto y penado en el artículo 227 del cp, estimando autor al acusado, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, interesando se le impusiera pena de diez meses de multa con cuota diaria de ocho euros y costas. Interesando asimismo que indemnice a la perjudicada en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia.

TERCERO.- La defensa formuló conclusiones definitivas solicitando dictado de sentencia absolutoria.

HECHOS PROBADOS

El acusado, [REDACTED], mayor de edad y sin antecedentes penales, con pleno conocimiento de su obligación de abonar en concepto de pensión alimenticia a favor de sus dos hijas, fruto de su matrimonio con [REDACTED]

██████████, la cantidad de 80 euros mensuales, obligación impuesta por sentencia de divorcio de fecha 8/10/12 dictada por el Juzgado de primera instancia número 1 de ██████████, no la ha abonado en ningún momento, ni siquiera de forma parcial. Durante este periodo, el acusado ha percibido el subsidio por desempleo durante al menos tres años alternos. Además de ello tiene dos vehículos a su nombre. No tiene relación alguna con sus hijas desde 2016. No consta que haya procedido al pago de las pensiones en metálico ni que haya abonado las mismas, ni siquiera en forma parcial ni en especie.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- A la relación de hechos probados se ha llegado partiendo del principio constitucional de presunción de inocencia proclamado en el artículo 24 de la Constitución Española, la consiguiente necesidad de un mínimo de actividad probatoria de cargo en el juicio oral y tras apreciar en conciencia la prueba practicada, conforme determina el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conectado a las garantías prescritas por el artículo 120 de la Constitución Española y en virtud de lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito contra los derechos y deberes familiares, previsto y penado en el artículo 227 del Código Penal.

Requisitos necesarios para su comisión son:

1.- En primer lugar, la existencia de una resolución judicial firme, recaída en autos de separación, nulidad o divorcio, o un convenio judicialmente aprobado, en los que se establezca una prestación económica a favor de uno de los cónyuges o de los hijos del matrimonio y a cargo del otro cónyuge o progenitor. Resolución judicial que otorga a aquellos la condición jurídica de acreedores frente a éste que deviene deudor, y que constituye precisamente el título jurídico que legitima al acreedor a exigir su cumplimiento y a hacerlo efectivo en sede judicial por las vías de apremio legalmente determinadas, sin que ello signifique, por otra parte, y como proclama una mayoritaria línea jurisprudencial, así, y entre otras, Sentencias de la Audiencia Provincial de Valladolid de 24 de noviembre de 2000, Madrid de 15 de septiembre de 2000, Pontevedra de 30 de mayo de 2000, Las Palmas de 2 de marzo de 2000, Valencia de 21 de octubre de 1999 o Barcelona de 30 de julio de 1999, que sea necesario para la concurrencia del tipo el que haya de interesarse previamente la ejecución de tal resolución en el procedimiento civil ni la existencia de un requerimiento de pago previo y formal de dicha pensión, pues, como señala la ya citada Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid de 24 de noviembre de 2000, la interpretación literal del precepto, que no contempla el requerimiento como uno de los elementos objetivos del tipo, no ofrece lugar a dudas. La obligación de pago del deudor de la prestación económica a que se refiere tal artículo, surge desde el momento en que haya sido acordada en convenio judicialmente aprobado o por resolución judicial en procesos de separación, nulidad o divorcio, siendo, desde luego, exigible y ejecutable, sin que dependa de acto alguno del beneficiado por ella. Y sin que, por otra parte, el tipo penal exija tampoco en modo alguno situación de necesidad en el sujeto acreedor de la prestación, dando cabida tanto a las pensiones de alimentos como a las meramente indemnizatorias, de la misma manera que el bien jurídico protegido no se limita a la seguridad o bienestar

El acusado comparece al acto de juicio y justifica el impago manifestando que apenas tiene ingresos económicos, habiendo cobrado el subsidio por desempleo durante tres años alternos y que son sus hermanas las que le procuran lo suficiente para subsistir. El acusado no ha abonado ni en metálico ni en especie, ni total ni en forma parcial, aun simbólica, la pensión a sus hijas. Tan solo ha realizado el pago de 100 euros desde la sentencia hasta la actualidad. Se ha desentendido de ellas en este aspecto, al menos, alegando que no ve a sus hijas desde el año 2016.

Siendo cierto la carencia de bienes declarados y no poniendo en duda esta Juzgadora la austeridad del acusado en su modo de vida, es lo cierto que ha estado percibiendo ayuda estatal durante tres años alternos y que sus hermanas le han abonado determinados gastos, además de haber estado dado de alta durante algunos meses. Las hermanas comparecen y declaran que el acusado fue el encargado de cuidar a su madre hasta el fallecimiento, remunerándolo por ello las mismas. Al parecer le daban 100 euros cada una.

El acusado tiene una profesión y, según declara, no ejerce de la misma porque no puede sufragarse los medios suficientes para acometer esa labor consistente en la fabricación de toldos puesto que necesita espacio y maquinaria adecuada para ello. Siendo ello cierto o no, el acusado tiene la obligación, como progenitor, de procurarse lo suficiente a fin de ayudar a la subsistencias de sus hijas. Pese a que la cuantía de la pensión no supera el mínimo vital, el acusado no la ha abonado ni un mes. Por el contrario, si ha atendido a otros gastos, a todas luces menos importantes, como es el mantenimiento de dos vehículos, con sus seguros correspondientes y gastos. Al parecer esos gastos se los cubren sus hermanas si bien, bien pudo destinar ese ingreso al pago de la pensión de sus hijas por importe de 80 euros mensuales. También hubo de abonar algo, aun de forma simbólica, cuando percibía el subsidio por desempleo.

Pese a que la sentencia fue de mutuo acuerdo, no ha procedido a instar el procedimiento de modificación de medidas hasta el año 2018, quizás simultáneamente a la iniciación del presente procedimiento. La denunciante ha soportado sola el mantenimiento de sus dos hijas, aun menores. No consta que haya intentado ayudar, aun en especie, a la denunciante.

Para justificar su actitud manifiesta que la vivienda familiar, de propiedad común, la disfrutaba la denunciante y que hace algún tiempo la tiene arrendada sin abonarle por este concepto pago alguno.

En primer lugar la vivienda se le atribuyo a ella por ser la progenitora custodia. De otra parte, la carga hipotecaria que aun pesa sobre dicha vivienda la abona la denunciante. En segundo lugar no ha quedado acreditado que la denunciante no resida en dicha vivienda ni que la tenga arrendada. Comparece el supuesto arrendatario según la defensa y manifiesta que es pareja de la denunciante y por ello vive allí.

Así, respecto del elemento subjetivo, el dolo, y como queda expuesto, concurre, según nuestra Jurisprudencia, siempre que se produce el impago, pudiendo efectuarlo por tener capacidad económica. El acusado, al parecer ha instado el procedimiento de modificación de medidas en el año 2018, esto es, seis años después de la sentencia de mutuo acuerdo, periodo en el que no ha procedido a realizar pago alguno, según él, por imposibilidad absoluta. Por ello, pese a que

esta Juzgadora no duda que existía estrechez económica, ha de entenderse que el acusado, al percibir unos ingresos en algunos periodos, pudo haber atendido en algún aspecto a sus hijas, aun simbólicamente, no realizándolo en modo alguno. De este modo, no se ha acreditado voluntad alguna de pago toda vez que si no podía ingresar mensualmente la totalidad de las pensiones podía haber abonado parte, circunstancia esta de la que se podría inducir su voluntad de cumplir.

SEGUNDO.- Del expresado delito es responsable el acusado, como autor, por haber tomado parte activa, material y voluntaria en su ejecución (art. 28 del Código Penal), en relación con el art. 27 del mismo texto legal.

TERCERO.- En la ejecución del expresado delito no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

CUARTO.- La pena a imponer para el citado delito, conforme a lo preceptuado en el artículo 227 del cp, es de seis meses de multa con cuota diaria de cuatro euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, conforme a lo preceptuado en el artículo 53 de dicho Cuerpo Legal.

QUINTO.- Según los arts. 109 y ss. y 123 y ss. del Código Penal, los responsables criminalmente de delitos y faltas lo son también de las costas que ocasione su enjuiciamiento, así como civilmente de los daños y perjuicios producidos. El acusado indemnizará a la perjudicada en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por las pensiones atrasadas y no abonadas desde la fecha de la sentencia, descontándose únicamente la cantidad de 100 euros, cantidad que devengará los intereses del artículo 576 de la LECv.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Debo **condenar y condeno** a [REDACTED] como autor responsable de **un delito de abandono de familia**, previsto y penado en el artículo 227 del cp, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena **de seis meses de multa con cuota diaria de cuatro euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, así como el pago de las costas procesales. Asimismo deberá indemnizar a [REDACTED] en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por las pensiones atrasadas y no abonadas desde la sentencia de divorcio hasta la actualidad, descontándose únicamente la cantidad de 100 euros**, más los intereses legales correspondientes.

Esta resolución no es firme y frente a la misma cabe recurso de apelación que habrá de interponerse ante este Juzgado en el plazo de 10 días, y del que conocerá la Iltma. Audiencia Provincial de Sevilla Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el día de la fecha por la Iltrma. Sra. Magistrada-Juez que la suscribe estando celebrando en Audiencia Pública, doy fe.